

La licenciada STEFANY JUÁREZ CARRILLO, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia emitida en el expediente número **0481/2020**, dictada en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por la licenciada MARÍA DEL ROCÍO FRANCO VILLALOBOS, Jueza Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, la cual consta de veinte fojas útiles. Version pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV, 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información. Además se hace constar que para la elaboración de la versión pública de la sentencia, se suprimió la información considerada legalmente confidencial.- Conste.

Aguascalientes, Aguascalientes, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

**V I S T O S**, para resolver los autos del expediente número **0481/2020** relativo al procedimiento especial de alimentos definitivos, promovido por ++++ **en representación de su hija menor de edad** +++++ en contra de +++++, misma que hoy se dicta, y;

#### **C O N S I D E R A N D O**

I.- El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, refiere:

**“Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.**

**Cuando el juicio se siga en rebeldía, deberán verificar de oficio, la existencia de los elementos para la procedencia de la acción”.**

**II.-** La actora +++++ demanda a +++++ por el pago de pensión alimenticia definitiva para su hija menor de edad +++++.

El demandado +++++, dio contestación a la demanda instada en su contra y niega la procedencia de las prestaciones que se le reclaman, *argumentando* que siempre ha estado al pendiente de su hija menor de edad, que actualmente está proporcionando habitación y vivienda, ya que es copropietario de la casa en la que habita su hija y él está pagando; que se encuentra pagando una deuda que dejó la actora en el colegio +++++, por la cantidad aproximada de siete mil pesos moneda nacional; y que la actora trabaja en un consultorio dental, por lo que también se encuentra obligada a dar alimentos a su hija menor de edad.

**En tal sentido**, la litis dentro del presente juicio, se centra en determinar si +++++ debe otorgar una pensión alimenticia a la actora +++++ para su hija menor de edad +++++, de acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades económicas del deudor alimentario, en términos de lo dispuesto por el artículo 333 del Código Civil del Estado.

**III.-** La actora +++++ se encuentra legitimada para demandar en la vía y forma que lo hace, en términos de lo dispuesto por el artículo 337 fracción II del Código Civil del Estado, pues con el atestado expedido por la Dirección del Registro Civil del Estado, visible a foja cuatro de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones –*documento ofertado en vía de prueba por la parte actora y que se valora en los mismos*

términos-, se acreditó que los litigantes son padres de +++++ y en ese sentido es indudable el derecho que tiene la actora para pedir alimentos al demandado en representación de su hija, en términos de lo dispuesto por el artículo 325 del Código Civil del Estado, pues los alimentos subsisten hasta en tanto la acreedora tenga necesidad de ellos, teniendo la menor de edad, con la sola promoción del juicio la presunción de necesitarlos.

**IV.-** Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se puntualiza que corresponde la parte actora acreditar los hechos constitutivos de su acción, habiéndose admitido y desahogado a las partes, las siguientes probanzas:

**PARTE ACTORA**

**DOCUMENTAL,** consistente en la copia simple de la credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, visible a foja tres de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 90, 281, 341 y 351 de la ley adjetiva civil del Estado, ya que se trata de la reproducción de un documento público, cuyo contenido fue protestado por la accionante en juicio, identificándose plenamente ante esta autoridad.

**DOCUMENTAL,** consistente en la constancia de estudios a nombre de +++++, expedida por la maestra +++++ Directora Académica de Secundaria del +++++, de fecha doce de febrero de dos mil veinte, visible a foja cinco de los autos, a la cual se concede valor de indicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para

tener por demostrado que la menor de edad +++++, en la fecha indicada, se encontraba inscrita en dicha institución como alumna regular, en el grupo tercero "B", nivel secundaria, en el ciclo escolar 2019-2020.

**TESTIMONIAL**, consistente en el dicho de +++++ y +++++, la cual en nada favorece a la parte actora, pues en audiencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **se declaró que dicha probanza, ya no sería desahogada en esta instancia, por causas imputables a la parte oferente.**

#### **PARTE DEMANDADA**

**CONFESIONAL**, a cargo de +++++ la cual en nada favorece a la parte demandada, pues en audiencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno conforme a lo dispuesto por el artículo 359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **se declaró que dicha probanza, ya no sería desahogada en esta instancia, por causas imputables a la parte oferente.**

**CONFESIONAL EXPRESA**, consistente en los hechos confesados por la actora en la solicitud de alimentos, donde reconoce que HERIBERTO OLMOS PARGA “...Es copropietario de un bien inmueble ubicado en la calle +++++, fraccionamiento +++++ de esta Ciudad, siendo en la que vive actualmente la compareciente con su hija...”, así como lo manifestado en el hecho siete, al referir que el demandado “sí tiene afiliada al Seguro Social a su hija +++++” en términos de lo dispuesto por el artículo 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

**DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME**, consistente en el informe que debió rendir la Secretaría de Finanzas Estatal, la cual en nada favorece a la parte demandada, pues en audiencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **se declaró que dicha probanza, ya no sería desahogada en esta instancia, por causas imputables a la parte oferente.**

**DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME**, consistente en el informe que debió rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual en nada favorece a la parte demandada, pues en audiencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **se declaró que dicha probanza, ya no sería desahogada en esta instancia, por causas imputables a la parte oferente.**

**DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME**, consistente en el informe que debió rendir la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la cual en nada favorece a la parte demandada, pues en audiencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **se declaró que dicha probanza, ya no sería desahogada en esta instancia, por causas imputables a la parte oferente.**

**PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, pruebas desahogadas en audiencia de fecha veintiocho de enero de dos mil

veintiuno, advirtiendo en este juicio, existe a favor de la menor de edad +++++, la presunción legal derivada del artículo 325 del Código Civil del Estado, en el sentido de que su padre tiene la obligación de proporcionar alimentos.

Asimismo, el demandado **acompañó** a su escrito de contestación de demanda, un recibo de pago a nombre de +++++ expedido por la Comisión Federal de Electricidad, documento visible a foja sesenta de los autos, al cual se concede valor de indicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para tener por demostrado que en la calle +++++ número +++++ del fraccionamiento +++++ de esta ciudad, se ha facturado por **consumo de luz eléctrica** en el periodo del dieciséis de enero al quince de marzo de dos mil diecinueve, la cantidad de doscientos ochenta y un pesos moneda nacional.

**Por otra parte**, con fundamento en los artículos 186, 242 y 571 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 325, 330, 331 Bis y 333 del Código Civil, ambos del Estado, esta juzgadora para conocer los ingresos actuales del demandado, ordenó recabar en forma oficiosa el informe rendido por el contador público +++++ +++++, de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, visible a foja sesenta y nueve de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se acredita que el demandado +++++, continúa laborando para dicha institución como +++++, recibiendo un **total**

**de percepciones** por la cantidad de once mil novecientos ochenta y dos pesos con cuarenta centavos moneda nacional, de manera quincenal, **menos** las deducciones por concepto de Fondo de Ahorro, Fondo de Prestaciones E., Préstamos a Corto Plazo, I.S.R. y Pensión Alimenticia [dos mil doscientos setenta pesos con sesenta y tres centavos moneda nacional] -*sin que se pierda de vista que para efectos de fijación de la pensión alimenticia, esta juzgadora para calcular la capacidad económica del demandado, resta del ingreso bruto las deducciones de carácter legal, en este caso, Fondo de Prestaciones E. e I.S.R.-.*

**V.-** De esta manera, se procede al estudio de la acción de alimentos definitivos reclamados por +++++ en representación de su hija menor de edad +++++, estableciéndose que el fundamento de los alimentos es el derecho a la vida que tiene toda persona necesitada de ellos, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 330 del Código Civil en el Estado, comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, respecto de la menor de edad, además los gastos necesarios para la educación escolar, y sano esparcimiento así como para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Por su parte, el artículo 325 del código sustantivo civil del Estado, señala:

***“Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado”.***

Así mismo, el artículo 333 del Código Civil del Estado, textualmente dice que:

**“Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos”.**

En consecuencia, esta juzgadora considera que es procedente la acción de alimentos definitivos promovida por +++++ en representación de su hija menor de edad +++++, pues el demandado como padre, tiene obligación de proporcionar alimentos.

Respecto a la necesidad de recibir alimentos +++++, debido a su minoría de edad *–pues cuenta con quince años–*, se encuentra impedida para allegarse de recursos para sobrevivir; siendo que en este caso quien corresponde desvirtuar tal presunción es al demandado, lo que no ocurrió en el presente caso.

Ahora, de las constancias que obran en autos, no se desprende que +++++, **cumpliera en forma puntual y completa, antes de la promoción del juicio**, con su deber de proporcionar alimentos a su hija +++++ y por ende acreditado el derecho que tiene la hija de los litigantes para recibir alimentos y el incumplimiento por parte del deudor alimentario con fundamento en lo dispuesto por los artículos 161, 325, 330 y 331 del Código Civil del Estado, se declara procedente la acción de alimentos hecha valer en juicio *–resultando en ese sentido **improcedentes** las defensas opuestas por el demandado en juicio–*.

A la anterior consideración, sirve de apoyo legal, por su argumento rector la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, tesis VI.3o.249 C, página 142 que dice:



**“ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto en el artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se necesita: "I. Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco del matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la obligación de dar alimentos; II. Que se acredite la necesidad que haya de los alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del demandado.". De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir el derecho que tiene a percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba corresponde al deudor”**

Luego, si tratándose del pago de alimentos debe respetarse el criterio de proporcionalidad contenido en el artículo 333 del Código Civil del Estado, de dicho precepto se desprende que esa proporcionalidad resulta de tomar en consideración dos extremos fundamentales, a saber:

1.- La necesidad de quien debe recibir alimentos, y

**A).** Con el atestado del Registro Civil relativo al nacimiento de la menor de edad +++++, queda plenamente demostrado que es acreedora alimentaria de +++++.

**B).** En lo relativo a las necesidades de la acreedora alimentaria virtud a los conceptos que señala el artículo 330 del Código Civil del Estado, esta autoridad estima que esos requerimientos en el caso que nos ocupa, se concretizan en los aspectos siguientes:

En lo referente a la comida, es indudable que la acreedora alimentaria requiere de una alimentación balanceada y para obtenerla es indispensable que se le proporcionen los recursos

económicos suficientes para su alimentación, derecho a que tiene todo ser humano.

En lo relativo al vestido, es indudable que la acreedora alimentaria necesita de ropa para usar en su vida ordinaria y variable según las estaciones del año, por lo que se deduce que requiere de ropa como chamarras, suéteres, playeras, pantalones, ropa deportiva, ropa interior, tenis, zapatos, huaraches, pantuflas, sandalias, todos ellos complementos de vestido que reportan diferentes precios que han aumentado con el costo de la vida, elementos que se debe de tomar en consideración para el otorgamiento de la pensión.

En lo tocante a la habitación, debe estimarse que el lugar donde vive genera gastos respecto de los cuales debe contribuir relativos a luz, agua y gas, así como de mantenimiento de dicho inmueble, conceptos para cuya satisfacción es indispensable que la acreedora alimentaria cuente con recursos económicos, a fin de satisfacer los mismos, existiendo la presunción de que los gastos por los conceptos referidos se realizan en forma permanente y continua; **en el entendido**, que según hechos confesados por la actora en la solicitud de alimentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la actora y su hija menor de edad, actualmente habitan en un inmueble del cual es copropietario el demandado, ubicado en la calle +++++ del fraccionamiento +++++ de esta ciudad, por lo que esta juzgadora considera que se encuentra *parcialmente cubierto* el rubro de habitación de la acreedora alimentaria [**situación que ya fue ponderada**

en la **sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte**] – resultando en ese sentido **parcialmente procedentes** las defensas opuestas por el demandado en juicio-.

Por lo que respecta a la asistencia en caso de enfermedad de la acreedora alimentaria, debe considerarse que requiere de asistencia médica tanto en el caso de que su salud se vea afectada por una enfermedad leve o una grave y aún en el supuesto de que sufra algún accidente que pusiera en peligro su vida; **en el entendido** que según hechos confesados por la actora en la solicitud de alimentos, en términos del artículo 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el demandado tiene afiliada como beneficiaria a su hija menor de edad, ante el Seguro Social (sic) [**situación que ya fue ponderada en la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte**] –resultando en ese sentido **parcialmente procedentes** las defensas opuestas por el demandado en juicio-.

En lo relativo a los gastos necesarios para la educación y recreación de +++++, de igual manera debe tener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades de educación y recreación.

En virtud de lo expuesto, queda plenamente demostrada la necesidad alimentaria de +++++ que para su satisfacción, es menester que el demandado le otorgue una pensión alimenticia con carácter definitivo que sea suficiente para satisfacer todas y cada una de sus necesidades.

## **2.- La posibilidad del que debe darlos.**

Por lo que respecta a la posibilidad del deudor alimentista +++, está demostrada su capacidad económica para otorgar alimentos, pues con el informe rendido por el contador público +++, de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, visible a foja sesenta y nueve de los autos, valorado en la presente resolución, se acredita que el demandado +++, continúa laborando para dicha dependencia como +++, recibiendo un **total de percepciones** por la cantidad de once mil novecientos ochenta y dos pesos con cuarenta centavos moneda nacional, de manera quincenal, **menos** las deducciones por concepto de Fondo de Ahorro, Fondo de Prestaciones F., Préstamos a Corto Plazo, I.S.R. y Pensión Alimenticia [dos mil doscientos setenta pesos con sesenta y tres centavos moneda nacional].

Ahora, se puntualiza que para efectos de fijar la pensión alimenticia que se reclama, de los ingresos brutos habrán de eliminarse únicamente las deducciones de carácter legal, pues en su caso, el resto de las deducciones derivan de obligaciones contraídas voluntaria y unilateralmente por el deudor alimentario.

Al respecto, sirve de apoyo legal, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 418, que es del texto y rubro siguiente:

**“ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN POR. Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos que percibe el deudor como contraprestación a sus servicios, pues no debe perderse de vista que dicha pensión se estableció con base en el salario integrado que percibe el demandado,**

entendiéndose por esto no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta, (Impuestos sobre Productos del Trabajo), de fondo de pensiones, y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas, pues dichas deducciones son impuestos por las leyes respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del salario que percibe todo trabajador, sobre estas sí debe fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los acreedores alimentistas, así como también deben de estar incluidas las percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, despesas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el demandado por su trabajo en la empresa donde labora”.

VI.- Bajo tal orden de ideas, es que se condena a +++++, pagar a favor de su hija menor de edad +++++, una pensión alimenticia con carácter definitivo, por la cantidad equivalente al VEINTITRÉS POR CIENTO de todas las percepciones brutas, ordinarias y extraordinarias que reciba el demandado *–restando del ingreso bruto las deducciones de carácter legal en este caso, Fondo de Prestaciones E. e I.S.R.–* en estos momentos, como empleado de la +++++.

**En el entendido**, que el monto fijado por concepto de pensión alimenticia definitiva, no rompe con el principio de proporcionalidad y equidad, que deriva del artículo 333 del Código Civil del Estado, pues se considera que dicho porcentaje sobre **todos** los ingresos del demandado *–prestaciones ordinarias y extraordinarias–*, además el deudor alimentario con el setenta y siete por ciento restante de su sueldo puede cubrir sus necesidades

básicas, sin que haya demostrado en el juicio, en contravención a lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el monto de sus gastos, así como la existencia de deudas (de la parte actora) y que sus ingresos, después de descontada la pensión alimenticia para su hija menor de edad, no le permita sufragar sus necesidades básicas de supervivencia – *resultando en ese sentido **improcedentes** las defensas opuestas por el demandado en juicio.*

**Además**, el demandado no acreditó en contravención a lo dispuesto por el artículo 235 de la ley adjetiva civil del Estado, que la actora trabaje en un consultorio dental, y por tanto que como persona económicamente activa se encuentre obligada a contribuir con los gastos alimentarios de su hija menor de edad, en términos de lo previsto por los artículos 330, 331 y 333 del Código Civil del Estado –*resultando en ese sentido **improcedentes** las defensas opuestas por el demandado en juicio.*

Al respecto, cabe mencionar que la pensión alimenticia señalada, se establece un porcentaje, en primer término porque el demandado tiene un trabajo remunerado, según las pruebas ya valoradas; y, por otro lado, fijada la pensión alimenticia en porcentaje permite el aumento o disminución de la pensión según las fluctuaciones de los ingresos del deudor alimentario.

Sirve de apoyo legal, por su argumento rector, la jurisprudencia sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 127-132, Cuarta Parte, página veintinueve, que es del rubro y texto siguiente:

**“ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No es ilegal la fijación de los alimentos con base en un porcentaje, puesto que con el puede regularse la proporción debida entre las necesidades de quienes debe recibirlos y la capacidad económica de quien está obligado a cubrirlos, según los términos del artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, que dispone: ‘Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos’; pero además de lo expresado, cabe hacer notar que el sistema de fijar alimentos señalando un porcentaje de las percepciones económicas, obviamente presenta la ventaja de eliminar la exigencia, al menos hasta cierto punto, de nuevos juicios encaminados a solicitar el aumento o disminución de la pensión alimenticia, porque el acreedor o acreedores, en efecto, una vez que obtuvieron determinado porcentaje, no tendrán que acudir a solicitar otro ante los tribunales, cada vez que aumente el grado de capacidad económica de su deudor alimentista, ni éste tendrá que pedir una disminución cuando su capacidad económica se vea menguada.”**

Luego, si tomamos en cuenta la finalidad de los alimentos, que es proveer a la acreedora lo necesario para su subsistencia y que la necesidad alimentaria se genera de momento a momento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 Constitucional, 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 15, 43 y 44 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, considerando el interés superior de la menor de edad +++++, principio rector que rige la materia familiar, y con la finalidad de establecer las medidas necesarias para que a la acreedora alimentaria, se le provea en forma oportuna y completa lo necesario para su subsistencia, resulta procedente ordenar respecto de la forma de pago de la pensión alimenticia definitiva que debe cubrir el demandado para su hija menor de edad, que se realice mediante descuento directo que haga la fuente

de trabajo del deudor alimentario, en la misma periodicidad en que reciba sus percepciones.

Lo anterior, obedece a la necesidad de que como ya se señaló, la menor de edad cuente en forma oportuna y completa con lo necesario para su subsistencia, y con el descuento que se le haga al demandado en su fuente de trabajo, existe mayor certeza y seguridad de que la acreedora alimentaria reciba la pensión alimenticia correspondiente, en forma puntual y completa, en lugar de dejar a la voluntad del deudor alimentario su cumplimiento; además, el hecho de que la fuente de trabajo del deudor alimentario, sea quien se encargue del pago de la pensión alimenticia correspondiente, permite que la acreedora alimentaria reciba en forma periódica y constante lo necesario para su subsistencia, pues de esta forma se obliga al deudor alimentario a privilegiar la obligación alimentaria que tiene con su hija menor de edad, sobre cualquier otra obligación de carácter convencional.

**En tal sentido**, y como fue evidenciado que el demandado labora para la +++++, se ordena requerir a dicha dependencia, para que continúe con el descuento que realiza sobre los ingresos de +++++, **pero ahora por concepto de pensión alimenticia definitiva**, la cantidad equivalente al VENTITRÉS POR CIENTO de todas las percepciones brutas, ordinarias y extraordinarias que reciba el demandado *-restando del ingreso bruto deducciones de carácter legal, en este caso, Fondo de Prestaciones E. e I.S.R.-* que deberá entregar en la misma periodicidad que el demandado percibe sus ingresos, a +++++, en representación de su hija menor de edad +++++, dejando sin efecto



el desquite ordenado por concepto de alimentos provisionales en sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 331 Bis del Código Civil, ambos del Estado, y responderá solidariamente con el obligado directo de los daños y perjuicios que cause a la acreedora alimentista por sus omisiones o informes falsos.

**VII.-** Por otro lado, a efecto de dar cabal cumplimiento al principio de exhaustividad que debe regir toda resolución judicial, previsto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se precisa que aún cuando el demandado acreditó el cumplimiento parcial a su obligación alimentaria - *habitación y asistencia médica*-, en términos de lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha situación no torna improcedente la acción de alimentos definitivos en la vía judicial, al entrañar éstos la supervivencia de la acreedora alimentaria

Lo anterior, debido a que siendo los alimentos una cuestión de orden público, es necesario, en aras de la seguridad jurídica de la acreedora alimentaria, que la autoridad judicial, tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes, fije el porcentaje o cantidad equitativa que deberá otorgarse, a efecto de que exista certeza respecto del cumplimiento constante y oportuno de dicho concepto, sin que se deje a la voluntad solamente de quien

debe proporcionarlos –resultando en ese sentido **improcedentes** las defensas o puestas por el demandado en juicio-.

Al respecto, sirve de apoyo legal, por su argumento la tesis de jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Mayo de 2000, Tesis X.1°.22 C, Página 963, que es del rubro y texto siguiente:

**“PENSION ALIMENTICIA, AUNQUE EL DEUDOR ALIMENTARIO SE ENCUENTRE REALIZANDO DEPÓSITOS, PROCEDE LA FIJACIÓN POR LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). El análisis integral de los artículos 299, 304 y 305 del Código Civil para el Estado de Tabasco, conduce a considerar que los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a favor de sus hijos, con la extensión propia de este concepto, que se traduce en habitación, escuela, servicio médico, despensa alimentaria, etc., sin los cuales resulta imposible la subsistencia de los menores. El cumplimiento de esa carga no está sujeta al arbitrio del deudor, sino que debe ser fijada por el órgano jurisdiccional en el que se tome en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, máxime que el derecho a recibir los alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, sin que obste el hecho de que el deudor acredite estar depositando determinada cantidad de dinero, pues ello no hace improcedente la fijación por una autoridad judicial competente de la pensión alimenticia definitiva a favor de los acreedores alimentarios”.**

VIII.- Por último, esta juzgadora no hace especial condena al pago de gastos y costas en perjuicio del demandado, pues con fundamento en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los numerales 304, 325, 330 y 333 del Código Civil, ambos del Estado, la acción de alimentos es de aquellas que debe ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, aunado a que ++++ limitó su actuación en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer posible la resolución del juicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.-** Se declara que la actora +++++ en representación de su hija menor de edad +++++, acreditó la acción de alimentos definitivos, mientras que el demandado +++++ contestó la demanda, resultando parcialmente procedentes las defensas opuestas en juicio.

**SEGUNDO.-** Se condena a +++++ pagar a la actora +++++ quien actúa en representación de su hija menor de edad +++++, una pensión alimenticia definitiva, por la cantidad equivalente al **VEINTETRES POR CIENTO** de todas las percepciones brutas, ordinarias y extraordinarias que reciba el demandado *–restando del ingreso bruto las deducciones de carácter legal, en este caso, Fondo de Prestaciones E. e I.S.R.–*, en estos momentos, como empleado de la +++++.

**TERCERO.-** Se ordena requerir a la +++++, para que del sueldo que percibe +++++, efectúe el descuento ordenado por concepto de pensión alimenticia definitiva, dejando sin efecto el descuento ordenado por concepto de alimentos provisionales en sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, con los apercibimientos decretados en la presente resolución.

**CUARTO.-** No se hace especial condena al pago de gastos y costas en perjuicio del demandado.

**QUINTO.-** En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto de dos mil veinte, **se ordena**

**se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia,** siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

**SEXTO.-** Notifíquese personalmente.

**ASÍ,** lo resolvió y firma la licenciada **MARÍA DEL ROCÍO FRANCO VILLA OBOS,** Jueza Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, ante la licenciada NORMA ANGÉLICA RÍOS ÁVILA, Secretaria de Acuerdos que autoriza.- Doy fe.

La presente resolución se publica en Lista de Acuerdos de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, lo que hace constar la licenciada NORMA ANGÉLICA RÍOS ÁVILA, Secretaria de Acuerdos de este juzgado.- Conste.